

Discurso empresarial vs. realidad campesina: la ecología política de la producción de soya en Santa Cruz, Bolivia

Enrique Castañón Ballivián¹

En las últimas décadas, la construcción de un discurso positivo en torno al cultivo de la soya ha sido una de las principales estrategias empleadas por el empresariado agroindustrial cruceño para salvaguardar su hegemonía. Desde la perspectiva de la ecología política, el artículo ofrece un análisis crítico sobre esta construcción discursiva y la contrasta con evidencias empíricas a nivel local. En particular, se analiza la maniobra discursiva que pretende posicionar al agronegocio sojero como una alternativa de progreso incluyente para con el campesinado de la región. El análisis cuestiona dicha maniobra argumentando que esconde los complejos procesos de diferenciación social al interior de las comunidades campesinas que de hecho han sido exacerbados por la expansión del cultivo de la soya en los últimos años.

Palabras clave: discurso, agronegocio, soya, diferenciación campesina, ecología política

Introducción

En las últimas décadas, la producción de soya en Sudamérica ha crecido de manera significativa. Mientras que a principios de los años 1970 la soya ocupaba 1,44 millones de hectáreas, en el año 2013 se sembraron más de 52 millones de hectáreas² (FAOSTAT 2015). Este impresionante crecimiento se acelera a partir de los años 1990 a consecuencia de la liberación comercial y de la implementación de paquetes tecnológicos basados en variedades genéticamente modificadas (Catacora-Vargas y otros 2012). Tales niveles de expansión de este cultivo han significado transformaciones rurales importantes en el Cono Sur cuyos impactos tanto sociales como ambientales han sido documentados extensamente (e.g. San-

1 Máster en Medioambiente y Desarrollo de la Escuela de Ciencias Sociales y Política Pública del King's College, Universidad de Londres (Distinción). Cursó sus estudios de postgrado gracias a una beca Chevening del consejo británico. Su trabajo explora las transformaciones rurales en contextos de expansión del capitalismo agrario desde la perspectiva de clase. Actualmente es investigador de la Fundación TIERRA (e.castanon@tierra.org).

2 Según FAOSTAT (2015), el total de hectáreas de soya en la región se reparte de la siguiente manera: Argentina 19.418.825; Bolivia 1.237.774; Brasil 27.864.915; Colombia 31.353; Ecuador 53.000; Paraguay 3.080.000; Perú 1.514; Suriname 15; Uruguay 1.200.000; Venezuela 33.758.

tos, Oyhantcabal y Narbondo, 2012; Catacora-Vargas y otros, 2012; Pengue 2004; Joensen, Semino y Paul 2005).

Originaria del Asia, la soya es una leguminosa cultivada para el aprovechamiento de sus semillas. Dado su alto contenido de aceite y proteínas, los granos de soya se han convertido en uno de los principales alimentos a nivel global sumándose al trigo, arroz y maíz (Weis 2007). La producción de soya en la región sudamericana se practica a manera de monocultivo, típicamente en predios superiores a las 500 hectáreas. Por tanto, las labores culturales se encuentran totalmente mecanizadas y el uso de insumos agrícolas (semillas transgénicas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, etc.) se encuentra generalizado (Catacora-Vargas y otros 2012). A medida que la tecnificación del cultivo ha aumentado, el control de la producción ha pasado a manos de las empresas transnacionales del agronegocio³. De hecho, se ha argumentado que la expansión soyera en Sudamérica ilustra el incremento en poder e influencia de estas empresas sobre la agricultura en concordancia con el proyecto de globalización neoliberal (Bernstein 2010).

En los últimos años, cerca del 90 por ciento de la soya que se siembra en Sudamérica se encuentra en Brasil (53 por ciento) y Argentina (37 por ciento) mientras que el restante 10 por ciento se reparte principalmente entre Paraguay, Uruguay y Bolivia (FAOSTAT 2015). Si bien la producción de soya en Bolivia resulta marginal a escala regional, a escala nacional este cultivo ocupa más de un tercio del total de la superficie cultivada. Se estima que actualmente existen alrededor de 1,2 millones de hectáreas del grano oleaginoso en las llanuras del departamento de Santa Cruz, al este del país (CAO 2014). La expansión soyera ha marcado un cambio radical de la estructura agrícola boliviana en las últimas décadas. Mientras que a mediados de los años 1980 solo nueve por ciento de la superficie cultivada estaba destinada a *commodities* industriales, esta proporción llegó al 48 por ciento en el año 2012; incremento explicado esencialmente por el *boom* de la soya de los últimos años. La soya ha pasado a ser el cultivo más sembrado en Bolivia superando a otros cultivos tradicionales como la papa y el maíz en una proporción de seis a uno. Del total de soya producida en el país prácticamente el 80 por ciento tiene por destino el mercado internacional, lo que la convierte en la principal exportación boliviana después de los minerales y los hidrocarburos (Castañón 2014).

De manera similar al resto de los países de la región, el establecimiento y consolidación del agronegocio soyero en Bolivia fue obra de los gobiernos neoliberales particularmente durante la década de 1990. A pesar de que la ortodoxia neoliberal apunta a la reducción sistemática del Estado en la economía, el Estado neoliberal en Bolivia intervino activamente a favor de los empresarios soyeros

3 Las transnacionales del agronegocio son aquellas compañías que dominan el comercio mundial de granos de manera oligopólica: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill and Louis Dreyfus; debido a sus iniciales a menudo se las denomina como el grupo ABCD (Murphy, Burch y Clapp 2012).

tanto con políticas públicas como con proyectos de inversión. Entre las acciones más claras se pueden destacar dos: 1) los esfuerzos por obtener mercados en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) desde su declaración como zona aduanera en 1993; y 2) la ejecución de un proyecto financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo denominado *Tierras bajas del Este* que sentó las bases materiales para la expansión de la producción sojera hacia el este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Pérez 2007).

De manera paralela, el empresariado sojero, en alianza con los gobiernos neoliberales, construyeron un discurso político que permitiera lograr legitimidad pública para su proyecto agrario. La soya fue presentada como una *commodity* de gran ‘ventaja comparativa’ capaz de llevar al país hacia una inserción efectiva en el comercio internacional, lo que a su vez traería progreso al conjunto de la sociedad boliviana. Si bien este discurso fue mutando con el tiempo –principalmente por la necesidad de reacomodo al nuevo contexto político después de la llegada al poder del presidente Evo Morales– el mismo tiene un correlato político determinante hasta la actualidad. De hecho, las políticas de Estado a mediano plazo propuestas por el actual gobierno en el marco de la denominada Agenda Patriótica 2025, incluyen una expansión significativa de la frontera agrícola bajo el modelo de agronegocio. Aunque aún no se cuenta con una meta oficial para esta expansión, altos funcionarios de Estado han manifestado su deseo de que la superficie cultivada pase de las actuales tres millones de hectáreas a 13 millones para el año 2025⁴ (Condori 2015). De mantenerse los actuales patrones agrarios en el país, dicha expansión estaría prácticamente dedicada al cultivo de soya.

Desde el enfoque de la ecología política, este artículo pretende contrastar el discurso del empresariado sojero con la situación del campesinado a nivel local. En particular, se analiza la discordancia entre la premisa discursiva que caracteriza al agronegocio sojero como un modelo socialmente inclusivo, y la diferenciación social campesina que el mismo genera a nivel local. El análisis del discurso empresarial está basado principalmente en una revisión de documentos oficiales del sector y de artículos de prensa; mientras que el análisis a nivel local se fundamenta en información primaria obtenida en dos comunidades campesinas del municipio de Cuatro Cañadas⁵, el de mayor producción sojera en el departamento de Santa Cruz. Los datos primarios provienen de una serie de entrevistas semi-estructuradas con informantes clave y una encuesta realizada a 50 hogares campesinos.

4 Es importante notar que esta aspiración gubernamental parece no tener asidero dado que en la actualidad no existen las condiciones materiales para su realización, tanto tecnológicas como de capital.

5 El municipio de Cuatro Cañadas se encuentra situado al noreste del departamento de Santa Cruz. Es la sexta sección municipal de la Provincia Ñunflo de Chávez y cuenta con una extensión territorial de 4.573,98 km². Limita al Norte con los municipios de San Julián y San Antonio de Lomerío; al Este con el municipio de San Miguel; al Oeste con el municipio de Okinawa y al Sur con el municipio de Pailón. El área urbana del municipio, que lleva el mismo nombre, se encuentra a 104 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra sobre la carretera Santa Cruz – Trinidad.

Una ecología política de la producción de soya

En su influyente libro *Degradación de la Tierra y Sociedad*, Blaikie y Brookfield (1987) argumentan que la ecología política en esencia combina preocupaciones ecológicas con un análisis de la economía política. Dicho análisis, se centra en la dialéctica constante entre la sociedad y el uso de los recursos naturales considerando las diferentes clases y grupos sociales que convergen. En otras palabras, la ecología política termina examinando la relación naturaleza-sociedad a través del análisis de las formas sociales que se establecen en el acceso y control sobre los recursos naturales (Watts y Peet 2004). El aprovechamiento de los recursos naturales es un hecho esencialmente político en el sentido de que se crean inevitablemente conflictos de intereses por la distribución de los beneficios y los perjuicios que acarrea. Estos conflictos a su vez se encuentran determinados por la distribución del poder al interior de la sociedad, hecho que obedece principalmente a la razón de clase, aunque también influyen razones étnicas, de género, entre otras (Swyngedouw 2004).

Una de las características distintivas de la ecología política es la perspectiva particular con la que explica las causas de las transformaciones agrarias y ambientales. Lejos de resaltar solo las causas inmediatas y palpables, eleva el nivel de explicación y abstracción rastreando causas más estructurales a través del análisis de 'cadenas de explicación' a múltiples escalas (Blaikie y Brookfield 1987). En este sentido, cobran particular relevancia estructuras como las instituciones estatales, los mercados globales y en general la economía política regional y global como factores determinantes de los procesos de transformación local.

Esta disciplina surge fundamentalmente con la intención de resaltar y explicitar el rol de 'lo político' en la transformación y manejo ambiental. Es decir, se busca desmitificar el supuesto carácter apolítico del manejo de los recursos naturales como si este fuese una cuestión estrictamente 'técnica' y concerniente únicamente a las ciencias puras como la biología o la ecología. En los últimos años, sin embargo, el análisis de 'lo político' dentro de la disciplina ha tendido a ocupar el centro de las contribuciones al punto que se ha denunciado un trato tangencial de la ecología en un sentido estricto. En respuesta, defensores de la disciplina han argumentado que a menudo las preocupaciones por la falta de análisis ecológicos reflejan una conceptualización reducida del medioambiente como solo un ente biofísico cuando la mirada dialéctica de la ecología política busca precisamente abordar el tema desde distintas miradas e incluso cuestionando las representaciones dominantes de lo que constituye 'lo natural' (Walker 2005).

Dentro de las tesis centrales de la ecología política, documentadas por Robbins (2003), dos guardan relevancia directa para el análisis conducido en este texto. La primera tesis destaca la importancia de los discursos, el conocimiento y

los valores predominantes en cuanto a las dinámicas de poder. El control sobre lo que se considera como conocimiento 'legítimo' y sobre los discursos hegemónicos en la sociedad se constituye en una importante fuente de poder. En este sentido, el poder no solo es ejercido materialmente a través del control efectivo sobre los medios de producción y los recursos naturales sino también en el ámbito de las ideas y los discursos. Pero como las dinámicas de poder están estrechamente relacionadas a la lucha de clases al interior de la sociedad, comúnmente las ideas y discursos que predominan son aquellos de la clase dominante. Consecuentemente, desde la ecología política se ha llamado la atención sobre el rol que juegan los discursos en la legitimización de agendas particulares que buscan un determinado uso de los recursos naturales.

En las últimas décadas, las ciencias sociales han enfatizado la importancia de estudiar las prácticas discursivas, una tendencia motivada en gran parte por el distintivo trabajo de Michael Foucault. Un 'discurso' es un grupo de enunciados que proveen del lenguaje necesario para referirnos a un tema en particular; este no está limitado a las palabras pues puede incluir además textos, políticas, teorías de conocimiento, estructuras institucionales y organizativas, relaciones sociales, prácticas culturales, etc. (Hall 1996 citado en Asher 2000). De particular relevancia para el presente trabajo es la conexión que Foucault traza entre el discurso y el poder:

“Debemos admitir que el poder produce conocimiento... Que la dirección del poder y el conocimiento se implican uno al otro; que no existe relación de poder sin la constitución correlativa de un campo de conocimiento, ni ningún conocimiento que no presuponga y constituya... relaciones de poder” (Foucault 1980, 27 citado en Asher 2000).

En este sentido, el vínculo inexorable con el poder hace que resulte importante el análisis de la construcción discursiva detrás de un problemática dada. Para tal efecto, se debe comprender que un discurso no necesariamente posee coherencia interna y que además a menudo es fluido por lo que resaltar los cambios que surgen de acuerdo a las condiciones de un contexto determinado ayuda a desnudar su conexión con ciertos intereses y agendas de poder.

La segunda tesis relevante hace hincapié en la problemática de la 'marginalización'. En las áreas rurales, los procesos de marginalización son el resultado de determinadas relaciones sociales que se establecen en función al contexto productivo y las dinámicas del capital. La marginalización de un grupo social denota una dinámica más amplia de diferenciación social que a su vez se desprende de las condiciones en las que la riqueza se convierte en capital, en particular cuando el capital no es consumido individualmente sino más bien invertido productivamente en el desarrollo de los medios de producción (Bernstein 1977).

La diferenciación campesina en particular ha sido abordada en el marco del debate de la 'Cuestión Agraria', protagonizado inicialmente por Karl Kautsky y Vladimir Lenin. En su análisis de la penetración del capital en el área rural, Kautsky argumentó que la creciente necesidad por dinero llevaría a procesos de especialización como estrategia para reducir costos de producción. Dicha especialización, sin embargo, implicaría a su vez una mayor dependencia ante el mercado así como un proceso de diferenciación social debido a que los productores campesinos 'no exitosos' optarían por el trabajo asalariado para cubrir sus déficits económicos. De esta manera, se consolidaría gradualmente la subordinación del campesinado no solo ante los mercados agrícolas sino también ante los mercados laborales. Esta subordinación, además, resultaría funcional al capital agrario y su necesidad constante de competitividad –que deriva de su conexión estrecha con la lógica del mercado– pues el arduo y extenso trabajo campesino terminaba convirtiéndose en un mecanismo para depreciar los salarios rurales reales (Akram-Lodhi y Kay 2010).

Por su parte, Lenin destaca la diferenciación social al interior del campesinado desde una perspectiva estrictamente materialista. A través de la identificación de estratos, el teórico marxista demostró que la emergencia del capitalismo agrario era posible a partir de las fragmentaciones sociales resultantes tanto de la explotación capitalista como del acceso diferenciado a los medios de producción. Identificó además una serie de mecanismos que facilitarían estos procesos de diferenciación mediante el incremento de la explotación relativa y/o absoluta. De los distintos elementos que analizó, dos tienen especial relevancia para el presente trabajo: 1) las economías de escala y 2) el crédito. En el primer caso, Lenin argumentó que el cambio tecnológico implícito –principalmente en forma de mecanización– conlleva una mayor extracción relativa de plusvalía, mientras que en el caso del crédito este deriva en diferentes tipos de endeudamiento que profundizan la brecha entre campesinos ricos y pobres. Mientras los primeros utilizan el crédito para acceder a nuevos productos que incrementen su productividad, los segundos tienden a endeudarse para cubrir sus costos de subsistencia, aumentando de este modo su dependencia ante el mercado (Akram-Lodhi y Kay 2010).

Estas dos tesis de la ecología política guardan estrecha relevancia con la problemática de la soya en Bolivia y por tanto pueden constituirse en potentes ejes analíticos, como se verá más adelante. En este punto basta notar dos principales dinámicas que resuenan con los preceptos teóricos: 1) existe un claro manejo discursivo por parte de los empresarios del agronegocio que busca legitimar su proyecto agrario particular para lo cual se utilizan supuestos contruidos de amplia aceptación social que, como se demuestra en este trabajo, contrastan con la realidad local; y 2) existe una creciente marginalización de las familias campesinas en Santa Cruz, misma que ha acentuado la diferenciación social campesina y por

consiguiente la proletarización del estrato más vulnerable. Estas cuestiones son las que ocupan el resto del documento.

¿El grano de oro? El discurso empresarial en torno al agronegocio sojero visto desde la ecología política

La implementación del ajuste estructural en 1985 y las sucesivas reformas neoliberales en Bolivia se justificaron bajo los argumentos de lograr estabilidad macroeconómica y crecimiento económico que permitiera alcanzar mayores niveles de bienestar. Mientras que existió un éxito relativo en cuanto a los fines de estabilización (Antelo 2000), el impacto en el crecimiento económico y las condiciones sociales ha sido fuertemente cuestionado. Existe evidencia suficiente para afirmar que estas políticas han contribuido al aumento de la desigualdad en toda la región (Hoffman y Centeno 2004). La implementación del modelo neoliberal modificó radicalmente la estructura económica del país principalmente a través de la liberación comercial, la priorización del sector privado y la consecuente reducción del Estado. Uno de los sectores más afectados por la nueva política económica instaurada ha sido sin duda el sector agrícola (Pérez 2007).

De manera similar a lo acontecido en el resto de Latinoamérica (Ver García 2003), las políticas neoliberales consolidaron en Bolivia una estructura agrícola dual donde, a pesar de su complejidad y diversidad, es posible identificar dos grandes grupos. Por un lado, se encuentra la gran mayoría de los agricultores y asalariados agrarios de origen campesino e indígena⁶ que fueron sistemáticamente abandonados por el Estado y que, a consecuencia de limitantes estructurales, su actividad productiva tiende a ser precaria y de baja productividad. Por otro lado, ha surgido un sector empresarial en el departamento de Santa Cruz que ha logrado consolidar un sistema productivo de corte agroindustrial altamente intensivo en capital y tecnología ligado a mercados internacionales de *commodities* agrícolas, principalmente la soya (Pacheco 2011). Como se mencionó previamente, la consolidación de este sector empresarial fue posible gracias al Estado neoliberal cuyas políticas comerciales, agrarias y de inversión estuvieron enfocadas en viabilizar la competitividad de la producción sojera (Pérez 2007).

Paralelamente al establecimiento de la base material del sector, el empresariado sojero empezó la construcción de un discurso que le aporte legitimidad pública a un proyecto que por sus dimensiones iría a cambiar radicalmente no solo el paisaje rural del departamento de Santa Cruz sino la estructura agraria nacional en su conjunto (Pérez 2007; Colque 2014). El discurso empresarial en torno a la producción de soya ha girado alrededor de tres principales argumentos: 1) la exportación de

⁶ Según datos oficiales, en Bolivia existen 872.641 unidades productivas (INE 2015), de las cuales se estima que una gran mayoría (94 por ciento en el año 2014) corresponderían a familias campesinas y/o indígenas (MDRyT 2014).

soya y su respectivo ‘efecto multiplicador’ son un pilar fundamental del crecimiento económico de Bolivia; 2) la producción de soya representa un aporte vital para la seguridad alimentaria del país; y 3) la producción de soya no es potestad exclusiva de una élite empresarial sino que más bien es una actividad inclusiva que representa una verdadera opción de progreso para el campesinado de la región. Este último argumento es el que se analiza críticamente en el presente documento.

Este discurso ha sido desplegado de manera relativamente coherente no solo a través de las publicaciones del gremio empresarial sino también en los medios de comunicación masivos nacionales, principalmente los escritos. En el transcurso del tiempo, sin embargo, el discurso tendió a enfatizar ciertos argumentos incorporándoles los matices necesarios en función al contexto político particular del país, se distinguen dos grandes momentos. El primer momento correspondió al surgimiento y consolidación de la producción de la soya durante la década de 1990 y principios de 2000, en pleno auge del neoliberalismo. El segundo momento está marcado por la ascensión del presidente Evo Morales al poder en el año 2006 que motivó, después de un periodo de confrontación, el amoldamiento del discurso empresarial sojero. El análisis realizado a continuación se centra en este segundo momento de la construcción discursiva.

En sus inicios, el discurso empresarial se apoyó fuertemente en la jerga economicista neoclásica. La soya era presentada como la nueva *commodity* de ‘ventaja comparativa’ capaz de incorporar a Bolivia al comercio internacional. En tiempos en que los gobiernos planteaban “exportar o morir”, este tipo de nociones coincidían con el discurso de progreso dominante. Consecuentemente, durante este periodo el discurso del empresariado sojero estaba centrado en resaltar el éxito en la exportación de soya así como la importancia de su ‘efecto multiplicador’ para la economía boliviana. Si bien el valor de las exportaciones de soya ha aumentado significativamente en las últimas décadas hasta convertirse en la principal exportación no tradicional del país⁷, evidencia reciente sugiere que la soya no gravita de forma determinante en el Producto Interno Bruto (PIB) del país (Sheriff 2013). El verdadero ‘efecto multiplicador’ que genera este grano oleaginoso se ve además cuestionado debido a que las estadísticas oficiales no toman en cuenta el insignificante nivel impositivo que aporta el sector, los subsidios de los que se favorece, las divisas volátiles y el destino final de las utilidades que en varias ocasiones terminan en bancos del extranjero (Urioste 2011).

Sin duda la llegada al poder del Movimiento al Socialismo (MAS) a partir de 2006 modificó radicalmente el contexto político del país. La élite política tradicional perdió el control del aparato estatal y –luego de enfrentamientos separatistas y regionalistas de los años 2008 y 2009 en Santa Cruz– el empresariado cruceño se vio obligado a

7 Entre 1992 y 2012, el valor de las exportaciones de los productos derivados de la soya aumentó de 56 a 989 millones de dólares americanos (INE 2012).

ceder el control exclusivo de la política agraria/alimentaria que había detentado desde la década de 1970. Sin negar que el poder económico de este grupo empresarial continúa gravitando fuertemente en varias carteras de Estado, es evidente que existe un recambio en cuanto a los perfiles de las autoridades, aunque es menos claro cuánto influye este hecho en la práctica política. De todos modos, en décadas pasadas los distintos ministros de agricultura no tenían solo una afinidad con la agroindustria cruceña sino que formaban parte íntegra de los grupos empresariales. Desde sus posiciones de poder realizaron una defensa férrea de sus intereses de clase, hecho que fue reconocido en reiteradas oportunidades por el gremio⁸, tal y como lo demuestra el discurso de Carlos Rojas al momento de ser posesionado como presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo)⁹ en el año 2005:

“...ponderamos el apoyo recibido del Lic. Diego Montenegro, ex-gerente general de Anapo, quien durante su gestión como ministro de agricultura logró diseñar y aprobar varias de las iniciativas propuestas por el sector agropecuario en general, y el oleaginoso en particular, durante muchos años” (Anapo 2012).

Durante los primeros años del gobierno del presidente Morales se estableció una relación antagónica con el empresariado agroindustrial. Este sector optó por apoyar política y económicamente la contra insurgencia de la élite boliviana amparada bajo la consigna de autonomías regionales (García Linera 2014), además de buscar sabotear la política alimentaria del gobierno mediante el ocultamiento de productos que dieron paso al agio y la especulación (Pérez 2009). Sin embargo, después de una serie de pulsetas políticas, a partir del año 2010 una parte importante del empresariado cruceño decide asumir la derrota política y buscar más bien un acercamiento con el gobierno que permita continuar expandiendo su actividad empresarial. Este cambio de actitud demandó un giro en el discurso empresarial para que este pueda enmarcarse en las premisas del denominado ‘proceso de cambio’¹⁰. Consecuentemente, el discurso del empresariado sojero empezó a girar sobre dos ejes: la importancia alimentaria para el país y el carácter inclusivo de esta actividad que representa una gran oportunidad no sólo para los empresarios sino también para los campesinos.

8 De hecho, dos exministros de agricultura que hicieron posible la implementación de los transgénicos en el país fueron condecorados en el año 2011 por el gremio del empresariado sojero (Los Tiempos 2011).

9 La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) con base en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene por misión: “Representar, defender, asesorar y asistir a los productores de oleaginosas y trigo del departamento de Santa Cruz, promoviendo la competitividad y sostenibilidad, con liderazgo y compromiso, apoyados en una estructura organizacional sólida y procesos de mejora continua”. Este gremio que usualmente se presenta como un ente técnico que busca la difusión de tecnologías, ha tenido paralelamente un claro rol político de defensa de los intereses de la élite agraria del este de Bolivia. Dado el poderío económico de sus miembros, su correlato político ha sido históricamente determinante en el país en general, y en la región en particular.

10 Se ha denominado ‘proceso de cambio’ al conjunto de cambios estructurales en la sociedad boliviana liderados por la administración del presidente Morales.

En cuanto al primer eje, es evidente que la reconfiguración del discurso pretende instaurar la noción que la alimentación de los bolivianos depende directamente del agronegocio. En esencia se busca establecer que su actividad tiene por principal fin el de “dar de comer al país” para de esta manera desviar la atención del claro fin de lucro y acumulación de capital que en la práctica caracteriza la actividad sojera. En concordancia con este giro, los representantes de este sector que en los años 1990 orgullosamente se autodenominaban ‘empresarios del agro’, en señal de status y para distinguirse de los campesinos, hoy en día retomaron términos más simples como el de ‘productor’ o ‘agricultor’. Esta es una construcción poderosa pues posesiona al sector como el proveedor de lo más esencial para la vida y le asigna un rol dentro del actual ‘proceso de cambio’. De hecho, en un reciente discurso en presencia del Presidente Morales, el entonces presidente de Anapo afirmó que: “...los productores seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer: producir alimentos para garantizar la seguridad alimentaria del país” (Anapo 2014).

Si bien se plantea que el esfuerzo del sector está enfocado en producir alimentos para resguardar la seguridad alimentaria del país, en la práctica de lo que se trata principalmente es de vender *commodities* al mercado internacional. Sin negar que una parte de la soya producida se destina para la alimentación del ganado boliviano y el abastecimiento interno de aceite, al analizar los datos resulta evidente que esto es lo menos. Se ha estimado que del total de la producción de soya en Bolivia –que en 2013 alcanzó cerca a las 2,5 millones de toneladas– el 20 por ciento se destina a la producción de aceite comestible refinado y que sólo una quinta parte de este se comercializa en el mercado interno. El restante 80 por ciento de la producción del grano oleaginoso se destina a la elaboración de materia seca para alimento de ganado, exportándose la gran mayoría, aunque los datos son menos claros (Pacheco 2011). El hecho que la gran mayoría de la producción sojera tenga por destino los mercados internacionales y no así el abastecimiento del mercado doméstico es una realidad invisibilizada por el sector que cuando se refiere a las exportaciones lo hace en términos de los “saldos” (Vargas 2014), cuando en realidad se trata del grueso de la producción. Además, el aporte real a la seguridad alimentaria del país se ve cuestionado por el hecho que su expansión parece implicar el reemplazo de otros cultivos de mayor importancia alimentaria como son el trigo y el maíz¹¹, dinámica que podría exacerbarse de aprobarse la producción de agrocombustibles (Pacheco 2011).

El segundo eje del discurso pretende alinearse con una noción central del nuevo momento político del país: la inclusión social, económica y política de los grupos históricamente marginados. Consecuentemente, en los últimos años, el dis-

11 Las estadísticas oficiales muestran que la impresionante expansión del cultivo de la soya en las últimas décadas está creando un desbalance en la estructura agrícola boliviana. Hoy por cada hectárea de papa, trigo o maíz hay más de seis de soya (Castañón 2014).

curso empresarial ha enfatizado el carácter inclusivo de la actividad sojera argumentando que esta no solo genera empleo para la población rural sino que además se constituye en una oportunidad de progreso real para el campesinado. De esta manera, se ha realizado un esfuerzo sistemático por mostrar que el sector sojero está conformado por una gran variedad de tipos de productores que incluyen una fuerte presencia campesina. De ahí que son comunes las alusiones a que la mayoría de los afiliados a Anapo son pequeños productores de origen campesino: “Unos 14.000 agricultores siembran soya, de los cuales el 80 por ciento son pequeños productores” (Anapo 2014) Si bien tales afirmaciones guardan cierta concordancia con la realidad, lo que no se devela es que estos pequeños productores son una minoría de la población campesina y que existen marcadas desigualdades en las relaciones de poder entre los diversos tipos de productores, pues, a pesar de la diversidad nominal, el control sobre la base material del sector (tierra e industria) está aún en manos de una reducida élite de grandes empresarios.

Sin duda la más clara señal política que el empresariado cruceño lanzó para apoyar el discurso de la inclusión fue la designación del Sr. Demetrio Pérez, un productor sojero de origen campesino, como presidente de Anapo en el año 2009¹². Nacido en el departamento de Potosí en una familia quechua del área rural, Demetrio Pérez ejemplifica un caso ‘exitoso’ de inclusión campesina en el cual un migrante de tierras altas se incorpora a la dinámica agroindustrial logrando consolidar y expandir su actividad hasta convertirse en un mediano productor. Esta fue la primera vez que el principal representante del gremio no surgía de la élite cruceña sino del sector campesino. Simbólicamente, su efecto fue poderoso al punto de marcar un punto de inflexión en la relación entre el empresariado sojero y el gobierno del MAS. Según el propio Demetrio Pérez, su relación con el presidente Morales es cercana y de confianza gracias a que comparten origen campesino y un compromiso con el desarrollo de los pequeños productores:

“Tanto él [el presidente Morales] como yo somos de extracción campesina y ambos buscamos el desarrollo de los pequeños productores. Ese fue quizá el gancho para que me invitara a una reunión en la que pretendíamos desmitificar que Anapo estaba siendo manejada por oligarcas y terratenientes... Lo importante es que conseguimos avances importantes para el sector. Es más, nos convertimos en puente para la apertura de diálogo con otros sectores” (Revista IN 2011).

Sin embargo, al estudiar la situación campesina en el departamento de Santa Cruz, encontramos que el éxito productivo alcanzado por el expresidente de Anapo no es la regla sino la excepción. En este sentido, la siguiente sección ofrece un

¹² Demetrio Pérez ejerció de manera ininterrumpida la presidencia de Anapo desde 2009 hasta 2015, siendo reemplazado recientemente por Reinaldo Díaz.

breve análisis sobre los procesos de diferenciación campesina a raíz de la consolidación del agronegocio sojero; lo que a su vez cuestiona fuertemente la premisa discursiva sobre su supuesto carácter inclusivo.

Productores y pobladores: procesos de diferenciación campesina en torno al agronegocio sojero

Esta sección está basada en trabajo de campo realizado en el año 2013 al interior de dos comunidades campesinas, Naciones Unidas y Nuevo Palmar, ubicadas en el municipio de Cuatro Cañadas. La evidencia empírica fue derivada de una encuesta realizada a 50 hogares¹³, cuatro grupos focales y una serie de entrevistas semi-estructuradas a informantes clave. La encuesta recolectó datos generales sobre la situación socio-económica y alimentaria de los hogares distinguiéndolos por estratos de riqueza para visibilizar los patrones de diferenciación social¹⁴. Adicionalmente, el análisis fue complementado con estadísticas oficiales, investigaciones previas e informes del gremio sojero. La sección comienza con una breve descripción de contexto para después pasar a analizar las particularidades del cultivo de la soya y los patrones de diferenciación social evidenciados.

Cuatro Cañadas, breve contexto histórico

Los primeros asentamientos en el actual municipio de Cuatro Cañadas tuvieron lugar en la década de 1960 como parte de una política estatal de colonización de las tierras bajas del país con migrantes de origen indígena de las tierras altas. Esta política comúnmente conocida como ‘Marcha al Oriente’ buscaba consolidar un nuevo polo de desarrollo económico en el oriente boliviano con base en un sector agrícola de corte agroindustrial. En línea con los planes de desarrollo de la época, estos esfuerzos estaban enfocados principalmente en la sustitución de importaciones pero en el caso boliviano buscaban además romper con el carácter monoprodutor de la economía que en ese entonces estaba prácticamente dominada por la actividad minera. Además, el desplazamiento demográfico hacia el oriente reduciría la presión sobre la tierra en el occidente de Bolivia. Durante las décadas de 1960 y 1970 fue el Instituto Nacional de Colonización (INC) el que promovió una parte importante de los asentamientos en el departamento de Santa Cruz; no obstante, el grueso de la

13 Si bien el tamaño de la muestra no permite una generalización estadísticamente significativa, se argumenta que las comunidades estudiadas –que fueron seleccionadas con ayuda de los informantes clave– son ejemplos adecuados de la situación socio-económica y agraria de la región.

14 La información primaria fue recolectada en el marco de un proyecto de investigación financiado por el IDRC-Canadá titulado: “Seguridad Alimentaria, Tierra y Territorio en Bolivia”. Los hallazgos en cuanto a las implicaciones alimentarias de la expansión sojera en comunidades campesinas fueron discutidas en otro trabajo (Véase Castañón 2014).

colonización se produjo de manera espontánea en las décadas siguientes gracias a los flujos migratorios de campesinos del occidente que vendían su mano de obra en la zafra de la caña de azúcar inicialmente y la cosecha de algodón posteriormente.

Previo al *boom* sojero, el paisaje de esta zona estaba dominado por comunidades campesinas dispuestas en los denominados 'núcleos de colonización'. De las 652 familias asentadas en la zona, prácticamente la totalidad (97,5 por ciento) disponían de tierra propia con una superficie promedio de 50 hectáreas. Se practicaba una agricultura de 'roza y quema' característica de los asentamientos colonizadores que estaba enfocada principalmente en la producción de arroz (28 por ciento) y maíz (64 por ciento). Si bien las labores agrícolas constituían la principal actividad económica para más del 80 por ciento de las familias, la actividad agrícola ocupaba solo el 16 por ciento del territorio (CORDECRUZ-CIPCA-SACOA 1992).

Sin embargo, la situación agraria y productiva se modificó radicalmente a medida que el agronegocio sojero empezó su acelerada expansión a mediados de los años 1990. En la zona en cuestión, la expansión sojera se dio a partir de 1993 con la implementación del proyecto *Tierras Bajas del Este* que contó con el financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este proyecto destinó cerca de 50 millones de dólares para sentar las bases materiales que permitan la expansión agroindustrial; en este sentido, se construyeron carreteras e infraestructura productiva además de desarrollarse mecanismos crediticios y planes de ordenamiento territorial. Colaborado por un contexto de precios internacionales favorables, el proyecto fue notoriamente exitoso en cuanto a la expansión de soya se refiere (Pérez 2007). Ya para el año 2000, la superficie cultivada de soya en el municipio de Cuatro Cañadas bordeaba las 140.000 hectáreas y continuaría creciendo hasta alcanzar en 2012 las 245.000 hectáreas; un incremento del 75 por ciento en tan solo 12 años. La cantidad de soya que hoy por hoy se siembra en el municipio le ha valido el apelativo de 'capital de la soya', aunque, como se mencionó, en comparación con otros países de la región la magnitud es ciertamente muy modesta (Castañón 2014).

La soya en Cuatro Cañadas, un cultivo que produce diferenciación campesina

Debido a sus condiciones edafo-climáticas, en Cuatro Cañadas la siembra de la soya se la realiza únicamente en la campaña de verano, mientras que en invierno los productores optan por otros cultivos, girasol y sorgo principalmente. Como sucede en otros contextos, la soya se produce bajo un modelo altamente intensivo en tecnología y capital. Desde la siembra hasta la cosecha, las labores culturales se encuentran completamente mecanizadas y estrechamente ligadas al uso de productos agroquímicos.

Según estimaciones recientes, el 95 por ciento de la semilla de soya que se utiliza en Santa Cruz es de origen transgénico por lo que el paquete tecnológico en base al herbicida Round-up¹⁵ es la opción dominante. La implementación de este 'paquete tecnológico' demanda importantes cantidades de capital. Estimaciones realizadas por el gremio sojero dan cuenta que en la zona de estudio se necesitan alrededor de 406 dólares estadounidenses por hectárea (USD/ha) de soya sembrada. De este costo total aproximadamente el 60 por ciento corresponde a los insumos agrícolas previamente descritos. Dentro de los insumos agrícolas, el costo de la semilla transgénica ronda los 70 USD/ha mientras que la inversión en los denominados 'defensivos agrícolas' pueden llegar a superar los 300 USD/ha (CAO 2014).

En consecuencia, la exitosa incursión en el cultivo de la soya se encuentra fuertemente condicionada por dos factores: 1) la disponibilidad de tierra que asegure la escala de producción para lograr rentabilidad; y 2) la disponibilidad de capital que permita la implementación del paquete tecnológico. Son estos factores los que establecen una marginalización de facto de la mayoría de las familias campesinas en Cuatro Cañadas. En el contexto estudiado, cerca de un tercio de las familias no posee tierra y entre aquellas familias que si disponen de parcelas, la superficie promedio continúa siendo las 50 hectáreas del núcleo de colonización.

Por otro lado, aun contando con tierra propia, la inversión necesaria se encuentra fuera del alcance de la mayoría de las familias campesinas; por tanto, incursionar en el agronegocio significa acceder a créditos. Sin embargo, como confirman los testimonios locales, el crédito es un mecanismo riesgoso, pues en años de adversidad climática ha derivado en la pérdida de sus propiedades para el pago de deudas. Incluso en años en los que el clima acompaña la producción, el margen de ganancia en una parcela tipo alcanza básicamente para cubrir los créditos y las necesidades básicas del hogar sin que la generación de ahorros sea significativa. Consecuentemente, la capitalización de las familias es un proceso incierto y, cuando se da, requiere de tiempos considerables. De hecho, aquellos campesinos que logran capitalizarse lo suficiente como para consolidarse en el modelo productivo tuvieron que trabajar sus tierras por más de 15 años. Su consolidación, sin embargo, no solo depende de la acumulación de capital sino que a través de esta logren asegurar un mayor acceso a tierra y tecnología, hecho que a su vez está condicionado por las relaciones de poder locales (Castañón 2013).

15 Propiedad de la empresa Monsanto, este herbicida se caracteriza por su amplio espectro que le permite controlar malezas tanto de hoja ancha como angosta gracias a su principio activo denominado Glifosato. No obstante, en Santa Cruz, el control de malezas en la actualidad incluye una serie de productos 'complementarios' dada la creciente resistencia al Glifosato. Asimismo, es muy común el uso de otro tipo de productos agroquímicos en la eliminación de plagas y/o enfermedades, y en otras labores particulares como por ejemplo la desecación de los cultivos previa la cosecha.

Patrones de diferenciación campesina en Cuatro Cañadas

La información primaria recolectada en el sitio de estudio sirve para evidenciar que en las comunidades campesinas la diferenciación social es un hecho palpable. Con base en las relaciones de producción que las familias establecen, es posible realizar una categorización general en tres grandes grupos de campesinos: pobres, medios, y ricos. No obstante, es importante puntualizar que el proceso de diferenciación evidenciado no es rígido, homogéneo y/o irreversible. Al interior de estos grupos nos encontramos con situaciones particulares variables en función a la capacidad de cada familia de relacionarse con el contexto socio-económico, pero esto, sin embargo, no invalida la distinción analítica en las tres grandes categorías que se describen a continuación.

Los campesinos 'pobres' conforman cerca de un tercio del total de la población campesina estudiada, aproximadamente un 31 por ciento de la muestra. Quienes están en este grupo a menudo son migrantes 'tardíos' que llegaron a la zona en los últimos años o son los hijos de los antiguos colonos. Es por esta razón que la gran mayoría no posee tierra alguna, aunque en algunos casos consiguen acceder a pequeños lotes a manera de huertos familiares. Por consiguiente, estos hogares no son capaces de garantizar su reproducción a través de la producción propia, lo cual les impulsa a vender su mano de obra de manera regular; se convierten en un proletariado en formación.

Estas familias se emplean como jornaleros en los campos de los empresarios, de los menonitas, y también en aquellos correspondientes a los campesinos más acomodados. Sin embargo, recurren a una combinación de oficios según la demanda laboral y utilizan toda la mano de obra disponible en la familia, por tanto es común que los hijos mayores trabajen. De manera general, estas familias reconocen su falta de acceso a la tierra como la principal causante del arduo régimen laboral que se les asigna. "Como no tenemos tierra nosotros, me la paso buscando trabajo de un lado a otro, para mantener, para vivir", declaró al respecto uno de los entrevistados.

La vulnerabilidad de este grupo se fundamenta en el acceso diferenciado que las familias tienen sobre los recursos productivos, tierra y capital principalmente. Su posición en las relaciones de producción locales se traduce cabalmente en la precariedad de sus condiciones materiales de vida. En su gran mayoría, estos hogares disponen de un par de cuartos de adobe¹⁶ localizados en la periferia de los pueblos. Usando las palabras de un entrevistado: "Así estamos viviendo nosotros, los que vivimos atrás, los que tenemos solo lote". Debido a que dependen fundamentalmente de la venta de su trabajo, y no de su producción propia, se los conoce localmente como los 'pobladores'.

16 El adobe es un pieza de construcción hecha de masa de barro y paja, muy común en las zonas rurales de los andes bolivianos.

Por otro lado, el segmento mayoritario de la población lo conforman los denominados campesinos 'medios' con un 58 por ciento de la muestra. Este grupo se caracteriza por contar con tierra propia pero enfrenta limitaciones en cuanto a la disponibilidad de capital. En su mayoría estas son familias que fueron parte de los procesos de colonización desde los años setenta por lo que comúnmente conservan su parcela tipo con una superficie de 50 hectáreas. La falta de capital, sin embargo, los excluye de la dinámica agroindustrial. Si bien algunas familias optan por el crédito para acceder al paquete tecnológico, la mayoría prefiere más bien rentar su tierra a otros productores –campesinos o menonitas– que sí cuentan con el capital necesario. Esta cautela ante el crédito parece estar basada en experiencias negativas de antiguas familias que terminaron vendiendo sus parcelas y migrando debido a su endeudamiento. Esta problemática queda claramente plasmada en el siguiente testimonio: “Como no tenemos [dinero] para el tractor y los productos, tenemos que alquilar la tierra; algunos han intentado con banco pero cuando vino la sequía se han endeudado mucho... tuvieron que vender su parcela e irse más adentro hacia Guarayos”.

A cambio de ceder su parcela, estas familias usualmente reciben el 25 por ciento de las utilidades netas que se obtengan del cultivo. Esto hace que compartan el riesgo con los productores pero a la vez les permite tener ingresos suficientes para costear las necesidades básicas de las familias con holgura. Estos acuerdos, sin embargo, se ven alterados a causa de la dinámica del mercado de tierras local y las relaciones de parentesco/amistad entre las partes. Por otro lado, es común también que en este estrato la mano de obra familiar se destine a la ganadería extensiva como actividad complementaria. En términos generales, estas familias logran su reproducción en base a su trabajo y tierra, pero lo hacen solo estableciendo relaciones particulares con otros grupos que poseen el capital suficiente para trabajar la tierra, entre los que destacan los campesinos 'ricos' de las propias comunidades.

Como se sugirió anteriormente, las familias campesinas que llegan a consolidarse en el agronegocio han atravesado por procesos de acumulación exitosos, aunque a menudo arduos y de larga duración. De hecho, en su mayoría son colonizadores asentados en la zona por más de 15 años. En las comunidades campesinas estudiadas, estas familias representan una clara minoría llegando solo al 10 por ciento de la muestra. Su estrategia se basa en un ciclo de reproducción ampliada de capital que les permite invertir en mayores niveles de medios de producción y fuerza laboral. Pese a que poseen formalmente una superficie promedio de 67 hectáreas, en la práctica controlan entre 100 y 200 hectáreas a través del arrendamiento y llegan a poseer la maquinaria necesaria para todo el proceso productivo. Estos campesinos 'ricos' son los que figuran en las estadísticas empresariales bajo el rótulo de 'pequeños productores'.

Asimismo, su situación económica privilegiada les provee de una posición de poder al interior de las comunidades. Por ejemplo, dado que monopolizan la maquinaria en las comunidades, disfrutan de un trato diferenciado por parte de los campesinos ‘medios’ que pugnan por ganar su empatía como estrategia para asegurar un futuro trabajo conjunto. Además, resulta interesante que estas familias son las que con mayor frecuencia ejercen los cargos comunales de autoridad, hecho que a su vez refuerza su posición de poder. Sin embargo, como ‘pequeños productores’ se encuentran subordinados ante la agroindustria, de la cual comúnmente reciben un trato discriminatorio. Por ejemplo, las asociaciones de pequeños productores campesinos han denunciado en numerosas ocasiones descuentos irregulares en los centros de acopio y precios por debajo de los que se pagan a los medianos y grandes empresarios quienes sostienen relaciones muy cercanas con el resto del clúster agroindustrial (Castañón 2013).

Discusión

Como bien lo plantea Valdivia (2010), la hegemonía del capitalismo agrario en Santa Cruz históricamente se ha sustentado en un manejo discursivo que pretende construir una imagen positiva y despolitizada de la realidad agraria. Una de sus varias premisas es que el agronegocio, en particular el sojero, representa una alternativa de progreso para el sector campesino. Como se mencionó, es esta premisa la que en la actualidad se resalta dada la necesidad del sector de sincronizar con las ideas dominantes del momento histórico y el contexto político actual bajo el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

Sin embargo, utilizando la perspectiva de la ecología política, el análisis presentado anteriormente da cuenta de que las características propias del cultivo de la soya conllevan a un modelo de producción excluyente que margina a la gran mayoría de familias campesinas y por tanto incrementa la diferenciación social a nivel local. La disponibilidad de tierra y de capital se constituyen en los factores que determinan de facto el carácter excluyente del agronegocio pues son imprescindibles para incursionar en la actividad sojera; esto a pesar de que un grupo de campesinos logre capturar parte del excedente productivo vía arrendamiento de sus tierras o lo que McKay y Colque (2015) denominan ‘exclusión productiva’. Estas limitaciones que enfrenta el campesinado, sin embargo, encuentran explicaciones de carácter estructural pues, a pesar de importantes procesos históricos como la Reforma Agraria de 1953, el campesinado boliviano aún no posee un acceso apropiado a la tierra y las relaciones de intercambio que entabla con el resto de la sociedad continúan siendo desiguales, hecho que reproduce su condición de pobreza (Kay y Urioste 2007).

Es importante notar que el modelo es excluyente en tanto no permite una participación equitativa en la distribución de la riqueza que genera y no así en

cuanto a una restricción en la actuación del proceso productivo en sí. Es en este sentido que siguiendo a Kay (2006), quizás resulte más apropiado hablar de 'inclusión discriminatoria' y no así de 'exclusión'. Esto porque el agronegocio absorbe a la totalidad del campesinado pero lo hace bajo sus propias condiciones. Es decir, el modelo permite una inclusión funcional a sus fines de acumulación de capital y no así a los fines igualitarios resaltados por la jerga discursiva. La dinámica productiva lleva a procesos de proletarización que buscan en esencia garantizar la disponibilidad de mano de obra barata. La participación de la gran mayoría de las familias campesinas se da en condiciones de subordinación cuando no de explotación.

Por otro lado, al profundizar la *comodificación* de la agricultura y la vida rural en general, el agronegocio consigue que las relaciones sociales pasen a estar principalmente mediadas por la lógica del capital y la correspondiente dependencia ante el dinero. Consecuentemente, se van configurando grupos sociales con distintas posiciones en las relaciones de producción. En este trabajo se realizó una aproximación a tres grandes categorías de campesinos (ricos, medios y pobres) donde sólo los del estrato más alto logran procesos de acumulación con base en la soya, grupo que además es el minoritario y alcanza aproximadamente al 10 por ciento de la muestra. De esta manera, la visibilización de los patrones de diferenciación social desmitifica el argumento del gremio empresarial que, a través de sus estadísticas, pretende mostrar que el número de pequeños productores afiliados es representativo del campesinado de la región.

De manera paralela, Valdivia (2010) nota que la estrategia discursiva promociona la noción del 'campesino exitoso' para así reforzar las diferencias raciales, económicas y culturales entre los propios campesinos. En este sentido, el 'éxito' se encuentra asociado al ascenso dentro de la jerarquía productiva que impone el agronegocio: de jornalero¹⁷ a pequeño capitalista. No obstante, en este proceso no solo se destaca la transición en cuanto a las relaciones de producción sino que además posee un elemento identitario, pues se trata de convertirse de 'migrante del occidente' a 'capitalista del oriente', en un contexto donde el segundo goza de una clara posición de poder sobre el primero no solo material sino también simbólica.

En este sentido, la designación de Demetrio Perez como presidente del gremio sojero no solo resultó útil en cuanto el relacionamiento con el gobierno del MAS sino que también contribuyó a conservar la hegemonía a nivel local en un momento en el que el conflicto entre las clases del capitalismo agrario en Santa Cruz pudo haberse exacerbado. No obstante, este tipo de maniobras políticas no logran ocultar las inequidades a las que los propios 'campesinos exitosos' conti-

17 Trabajador asalariado que cobra por jornada trabajada.

núan siendo sometidos; es quizás por esta razón que optaron por conformar su propio ente gremial: la denominada *Cámara de Pequeños Productores del Oriente* (CAPPO). El empresariado por su parte parece estar en una fase de reacomodado dado que el conflicto con el gobierno del MAS no solo se ha superado sino que sea ha convertido en una alianza. En consecuencia, recientemente reeligieron como presidente del gremio sojero a Reinaldo Díaz, el mismo que en 2008 calificó como una “traición a la patria” la política alimentaria del presidente Morales (Los Tiempos 2008).

Conclusiones

Este documento analizó el discurso empresarial en torno al agronegocio sojero y lo contrastó con evidencia empírica a nivel local desde la perspectiva de la ecología política. El análisis presentado muestra un giro en el discurso mediante el cual el empresariado pretende resguardar su hegemonía ante un nuevo contexto socio-político en Bolivia. Uno de los elementos centrales de este giro ha sido el de presentar al agronegocio como un modelo ‘inclusivo’ y, por tanto, como una oportunidad de progreso para el campesinado local. Lo ‘inclusivo’ es planteado en términos de igualdad de oportunidades para acceder al modelo productivo y sus beneficios económicos. Para sustentar esta posición, el empresariado recurre usualmente a sus estadísticas sobre el número de ‘pequeños productores’ inmersos en la actividad agroindustrial combinándolas con concesiones simbólicas como la de nombrar como presidente del gremio a un productor de origen campesino.

A través de información primaria recogida en dos comunidades del municipio de Cuatro Cañadas –en pleno epicentro de la producción sojera del país– el análisis sugiere que el agronegocio es una opción viable solo para una minoría de las familias campesinas debido a que requiere de significativas cantidades de tierra y capital que están fuera del alcance de la gran mayoría de la población campesina de la región. En el contexto estudiado, por ejemplo, los campesinos de estrato ‘pobre’ y ‘medio’ representan el 89 por ciento de la población muestreada, mientras que los campesinos ‘ricos’ solo llegan al 10 por ciento. Este reducido grupo de campesinos ‘ricos’ es el que se logra insertar en el modelo productivo y por tanto el que figura en las estadísticas del gremio empresarial bajo el rótulo de ‘pequeños productores’. Es en base a este grupo minoritario de campesinos que se pretende construir una generalización que abarque al resto del campesinado de la región; ignorando de este modo, la marcada diferenciación social que termina clasificando a las familias en ‘productores’ y ‘pobladores’.

Referencias

- Akram-Lodhi, H. y Kay, C. (2010). Surveying the agrarian question (part 1): unearthing foundations, exploring diversity. *The Journal of Peasant Studies*, 37(1), 177-202.
- Anapo. (23 de octubre de 2012). Discurso - *Acto de posesión del directorio 2005*. Obtenido de <http://www.anapobolivia.org/detdiscurso.aspx?ids=4>
- Anapo. (12 de diciembre de 2014). *Aumentó la producción de soya y trigo en 2014*. Obtenido de <http://www.anapobolivia.org/detnotides.aspx?idn=155>
- Anapo. (21 de marzo de 2014). *Discurso del presidente de Anapo en Exposoya 2014*. Obtenido de <http://www.anapobolivia.org/detdiscurso.aspx?ids=11>
- Antelo, E. (2000). *Políticas de estabilización y de reformas estructurales en Bolivia a partir de 1985*. La Paz, Bolivia: Comisión Económica para América Latina - CEPAL.
- Asher, K. (2000). Mobilizing the Discourses of Sustainable Economic Development and Biodiversity Conservation in the Pacific Lowlands of Colombia. *Strategies*, 13(1), 111-125.
- Bernstein, H. (1977). Notes on Capital and Peasantry. *Review of African Political Economy*, 60-73.
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Canadá: Fernwood Publishing.
- Blaikie, P. y Brookfield, H. (1987). *Land degradation and society*. London: Methuen.
- CAO. (2014). *Números de Nuestra Tierra*. Santa Cruz, Bolivia: Cámara Agropecuaria del Oriente.
- Castañón, E. (Septiembre de 2014). Cuando la soya se impone: transformaciones en las comunidades campesinas y sus implicaciones alimentarias. *Cuestión Agraria*, 1(1), 27-53.
- Castañón, E. (2013). *Comunidades campesinas en territorio agroindustrial: diferenciación social y seguridad alimentaria en el municipio de Cuatro Cañadas*. Obtenido de Fundación TIERRA: http://www.ftierra.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1219&Itemid=65
- Castañón, E. (Febrero de 2014). *Las Dos Caras de la Moneda: Agricultura y Seguridad Alimentaria en Bolivia*. Obtenido de Fundación TIERRA: http://www.ftierra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18197:las-dos-caras-de-la-moneda&catid=159:sa&Itemid=239
- Catacora-Vargas, G., Galeano, P., Agapito-Tenfen, S., Aranda, D., Palau, T., & Onofre, R. (2012). *Producción de Soya en el Cono Sur de las Américas: Actualización sobre el Uso de Tierras y Pesticidas*. Cochabamba, Bolivia: Vrimegraf.
- Colque, G. (2014). *Expansión de la frontera agrícola. Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano*. La Paz: Fundación TIERRA.
- Colque, G., Urioste, M. y Eyzaguirre, J. (2015). *Marginalización de la agricultura campesina e indígena. Dinámicas locales, seguridad y soberanía alimentaria*. La Paz: Fundación TIERRA.
- Condori, I. (5 de abril de 2015). La Cumbre Agropecuaria definirá lineamientos para la Agenda 2025. *La Razón*. Obtenido de http://www.la-razon.com/economia/Cumbre-Agropecuaria-definira-lineamientos-Agenda_0_2246775352.html
- CORDECRUZ-CIPCA-SACOA. (1992). *Diagnóstico socio-económico de la colonia San Julián*. Santa Cruz: CORDECRUZ, Unidad de Planificación de Proyectos.
- FAOSTAT. (17 de septiembre de 2015). *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Obtenido de FAOSTAT database: <http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor>
- García Linera, Á. (8 de julio de 2014). Debate abierto. (M. Galindo, Entrevistadora)

- García, F. (2003). El ajuste estructural neoliberal en el sector agrario latinoamericano en la era de la globalización. *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, 3-29.
- Hoffman, K. y Centeno, M. A. (2004). El Continente Invertido. Desigualdades en América Latina. *Nueva Sociedad*, 97-111.
- INE. (2012). *Anuario Estadístico*. La Paz: Instituto Nacional de Estadística.
- INE. (15 de febrero de 2015). *Instituto Nacional de Estadísticas*. Obtenido de Censos Bolivia: <http://censosbolivia.ine.gob.bo>
- Joensen, L., Semino, S. y Paul, H. (2005). *Argentina: A Case Study on the Impact of Genetically Engineered Soya*. London: The Gaia Foundation.
- Kay, C. (2006). Rural poverty and development strategies in Latin América. *Journal of Agrarian Change*, 6(4), 455-508.
- Kay, C. (2008). Reflections on Latin American Rural Studies in the Neoliberal Globalization Period: A New Rurality? *Development and Change*, 915-943.
- Kay, C. y Urioste, M. (2007). Bolivia's Unfinished agrarian reform: Rural poverty and development policies. En A. H. Akram-Lodhi, S. M. Borras, & C. Kay (Edits.), *Land, poverty and livelihoods in the era of globalization: Perspectives from developing and transition countries* (págs. 41-79). London and New York: Routledge.
- Los Tiempos. (30 de mayo de 2008). IMBA deja de exportar 10 mil pollos semanales. *Los Tiempos Economía*. Obtenido de http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20080530/imba-deja-de-exportar-10-mil-pollos-semanales_10673_14317.html
- Los Tiempos. (4 de mayo de 2011). Posesionarán a la Directiva de Anapo con Demetrio Pérez como Presidente. *Los Tiempos*. Obtenido de http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110504/posesionaran-a-la-directiva-de-anapo-con-demetrio-perez-como_124246_249334.html
- McKay, B. y Colque, G. (2015). Bolivia's soy complex: the development of 'productive exclusion' . *The Journal of Peasant Studies*.
- MDRyT. (27 de agosto de 2014). *Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras*. Obtenido de Organizan simposio internacional de la agricultura familiar comunitaria para la soberanía alimentaria: <http://mdrytbolivia.blogspot.com/2014/08/organizan-simposio-internacional-de-la.html>
- Murphy, S., Burch, D. y Clapp, J. (2012). *Cereal Secrets The world's largest grain traders and global agriculture*. Oxfam Research Reports.
- Pacheco, D. (2011). *Agrocombustibles y Seguridad Alimentaria en Bolivia*. La Paz, Bolivia: Asociacion de Instituciones de Promocion y Educacion - AIPE.
- Pengue, W. (2004). *La transnacionalización de la agricultura y la alimentación en América Latina*. Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente.
- Pérez, M. (2007). *No todo grano que brilla es oro. Un análisis de la soya en Bolivia*. La Paz, Bolivia: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
- Pérez, M. (2009). Bolivia: La actual situación alimentaria ¿crisis o momento difícil? En L. Delcourt, *La crisis alimentaria. Movilizaciones en el sur* (págs. 223-230). Madrid, España: Editorial Popular.
- Revista IN. (1 de marzo de 2011). "Evo está desesperado". Obtenido de Información Independiente: <http://www.in.com.bo/2011/03/%E2%80%9Cevo-esta-desesperado%E2%80%9D/>
- Robbins, P. (2003). *Political Ecology: a critical introduction*. Oxford: Blackwell.
- Santos, C., Oyhantcabal, G. y Narbondo, I. (2012). *La expansión del agronegocio agrícola en Uruguay: impactos, disputas y discursos*. San Francisco, California: Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos.

- Sheriff, E. (2013). *Impacto del Sector Sojero en la Economía Boliviana*. La Paz, Bolivia: Liga de Defensa del Medioambiente LIDEMA .
- Swyngedouw, E. (2004). *Social power and the urbanization of water*. Oxford: Oxford University Press.
- Urioste, M. (2011). *Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia*. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Valdivia, G. (2010). *Agrarian Capitalism and Struggles over Hegemony in the Bolivian Lowlands*. *Latin American Perspectives*, 37(4), 67-87.
- Vargas, N. (7 de julio de 2014). *Ocupados en el agro subieron en 292% entre 1992 y 2012*. Obtenido de Pagina Siete - Diario Nacional Independiente: <http://www.paginasiete.bo/economia/2014/7/7/ocupados-agro-subieron-292-entre-1992-2012-26090.html>
- Walker, P. (2005). Political ecology: where is the ecology? *Progress in Human Geography*, 29(1), 73-82.
- Watts, M. y Peet, R. (2004). Liberating political ecology. En M. Watts, & R. Peet, *Liberation ecologies*. London: Routledge.
- Weis, T. (2007). *The Global Food Economy: The Battle for the Future of Farming*. London: Zed Books.